

Santiago, tres de junio de dos mil veinticinco.

Vistos:

En causa rol N° 10394-2023 del Vigésimo Cuarto Juzgado Civil de Santiago, juicio ordinario de indemnización de perjuicio, caratulado “MANZANO/FISCO - CDE”, con fecha cinco de agosto de dos mil veinticuatro, se dictó sentencia que acogió parcialmente la excepción de reparación integral del daño y rechazó la excepción de prescripción esgrimidas por el demandado y, además, acogió la demanda, condenando al Estado de Chile a pagar a cada una de las tres demandantes, a título de indemnización por daño moral, la cantidad de \$30.000.000, reajustada de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor entre la fecha en que la sentencia de marras se encuentre ejecutoriada y la del pago efectivo de la misma, suma que devengará intereses corrientes para operaciones reajustables en el mismo lapso.

En contra de la referida sentencia, la parte demandante, dedujo recurso de casación en la forma y, conjuntamente, apelación, mientras que la demandada apeló.

Se ordenó traer los autos en relación.

Considerando:

I.- En cuanto al recurso de casación en la forma.

Primero: Que en el arbitrio en estudio se acusa que la sentencia impugnada incurrió en la causal de casación prevista en el artículo 768 N°5 del Código de Procedimiento Civil en relación al artículo 170 N° 4 del mismo cuerpo legal, al carecer de fundamentos de hecho, toda vez que se acoge parcialmente la reparación integral, sin embargo, los argumentos esgrimidos para arribar a este resultado son contradictorios, pues, por una parte, en el considerando décimo cuarto se señala expresamente que debe tenerse por efectiva la reparación integral efectuada por el Estado, señala, asimismo, que debería estimarse suficiente de acuerdo a las circunstancias y capacidad económica del Estado de Chile.

Sin embargo, en el considerando siguiente, señala que las mismas leyes que sirvieron de fundamento para arribar a la conclusión de que habría una reparación moral, regularían únicamente beneficios de carácter social y no una indemnización por daño moral, pues, para otorgarlas no se consideraron los elementos particulares de cada víctima y esto sería un requisito esencial al momento de fijar una indemnización por daño moral.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QXSTXVXSMT

Finalmente, el considerando décimo sexto acoge parcialmente la indemnización por daño moral.

Tales razonamientos son contradictorios y, por lo tanto, se anulan entre sí, pues, por un lado, señala que existiría reparación moral integral y, por otro, que estas prestaciones no pueden considerarse para ello pues son universales y no miran los elementos particulares, propio de las reparaciones de daño moral.

Segundo: Que de conformidad a lo dispuesto en el inciso penúltimo del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, el tribunal *ad quem* podrá desestimar el recurso de casación si de los antecedentes aparece de manifiesto que el recurrente no ha sufrido un perjuicio reclamable solo con la declaración de nulidad, cuestión que es relevante, en la medida que, si la parte deduce conjuntamente recurso de apelación, el tribunal superior puede entrar al análisis del recurso de grado derechamente.

Tercero: Que, las alegaciones que sustentan el presente arbitrio, son las mismas esgrimidas en el recurso de apelación deducido por la demandante, de modo que es el propio recurrente quien da cuenta que el vicio que reclama puede ser enmendado tanto por la vía de la nulidad formal, como por la apelación, lo que es motivo suficiente para desestimar la casación formal.

II.- En cuanto al recurso de apelación.

Se reproduce íntegramente la sentencia en alzada, con excepción de sus fundamentos décimo cuarto a décimo sexto y vigésimo tercero.

Y teniendo además presente.

1) Que, en contra de la sentencia de primer grado se alzó la parte demandante, cuestionando la circunstancias de haberse acogido parcialmente la excepción integral del daño, rebajando el monto de indemnización de perjuicios fijado por el tribunal, el que se estima, absolutamente insuficiente.

Por su parte, el Fisco de Chile, cuestiona el rechazo de las excepciones de prescripción y reparación integral de daño, el establecimiento del daño moral que se indemniza y la forma en que se ordena pagar los intereses.

2) Que en lo que atañe a la alegación de reparación integral esgrimida por el demandado, sustentada en las prestaciones en dinero y otros medios de compensación destinados a reparar a las víctimas, aparece relevante



señalar, en primer término, que es necesario diferenciar la responsabilidad civil de los mecanismos indemnizatorios legales que forman parte de las instituciones del derecho público.

En este orden de ideas es posible diferenciar la responsabilidad civil, que tiene por finalidad establecer la obligación de un sujeto de hacerse cargo del daño sufrido por otro, de las pensiones que se devengan para ciertas personas por daños tolerados a consecuencia de enfermedad, invalidez, incapacidad laboral, vejez u otras circunstancias particulares, que no tienen una naturaleza propiamente reparatoria.

La importancia de la distinción radica en que el responsable extracontractual, no puede pretender que se imputen a la indemnización debida las cantidades que la víctima haya percibido como beneficiario de estas indemnizaciones o pensiones de carácter previsional o asistencial;

3) Que, en consecuencia, dada la naturaleza asistencial de la pensión y de los bonos entregados por las leyes N°19.123, N°19.992 y N°20.874, que se pagan por el Estado de Chile a los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, no pueden tales montos considerarse una indemnización destinada a cubrir la responsabilidad del Estado de Chile, sin que aquellas sumas puedan ser descantadas o consideradas al establecer el quantum indemnizatorio en una causa de origen civil, en que se pretende hacer efectiva tal responsabilidad.

En efecto, la interpretación sistemática, histórica y teleológica de las normas que integran la Ley N° 19.992, es posible concluir que el bono de reparación constituye únicamente un beneficio de carácter social más no una indemnización del daño moral sufrido por las víctimas directas de violación a los derechos humanos, pues no aparece que en la determinación de su monto se hayan considerado los elementos propios, individuales y personales de quienes debieron soportar tales sufrimientos, requisito fundamental a la hora de fijar una indemnización que no puede ser entendida sino con la finalidad de reparar o compensar un daño cierto y determinado.

En consecuencia, no procede imputar a la indemnización fijada a las actoras las cantidades que hubieren percibido, en calidad de beneficiarias de las prestaciones previstas en las leyes N°19.123, N°19.992 y N°20.874.

4) Que, asentado lo anterior, en cuanto a la apelación del Fisco, de prescripción, esta Corte comparte los fundamentos expuestos para su



rechazo en los considerandos décimo octavo y décimo noveno del fallo impugnado.

5) Que, respecto del establecimiento del daño moral, se debe señalar que se encuentra asentado en autos que las actoras son hijas de Osvaldo Mario Manzano Cortes detenido desaparecido que, según la sentencia dictada en los autos Rol N°35.738-AG del Segundo Juzgado de Letras de Quillota, episodio “Asalto a la Patrulla Militar”, fue víctima de secuestro calificado por parte de agentes del Estado, específicamente, funcionarios del Ejército de Chile. Así, se tiene por reconocido que fue un prisionero político y ejecutado del régimen militar, teniendo el carácter de víctima de violación a los derechos humanos.

6) Que, se encuentra acreditado en el proceso que las demandantes, a la fecha de detención y desaparición de su padre, por parte de agentes del Estado, tenían la edad de 5 años (Yanet), 3 años (Paola) y 6 meses (Sandra).

La sola circunstancia antes referida, permite establecer la existencia del daño moral, dada la corta edad de las actoras, que permite vincular la existencia del daño a su crecimiento y desarrollo sin la figura paterna, pues lo natural, es que las personas crezcan bajo el cuidado y protección de sus progenitores.

Sin perjuicio de lo anterior, se debe señalar que en estos autos se encuentra acompañado informe PRAIS de cada una de las actoras, que da cuenta del impacto sufrido en la madre y la familia y refiere el daño sufrido por ellas, que se manifiesta en la salud mental y emocional de las evaluadas, quienes experimentan sentimiento de abandono y pérdida, además de trauma emocional por pérdida del padre.

7) Que, en razón de lo expuesto, esta Corte regulará prudencialmente en la suma de \$50.000.000 el monto que se debería pagar con concepto de indemnización a cada una de las actoras, suma que se condice con aquellas que han sido ordenadas en casos similares, considerando, especialmente, que la naturaleza del daño alegado, determina que cualquiera sea la cantidad que se ordene pagar, la indemnización solo tendrá un carácter compensatorio, puesto que ninguna cifra que se ordene pagar puede hacer desaparecer el daño alegado.

8) Que, respecto de la impugnación de los intereses, la sentencia establece, acertadamente que la cantidad que se ordena pagar deberá incrementarse con reajustes, conforme con la variación del Índice de Precios



al Consumidor, entre la fecha en que la sentencia de marras se encuentre ejecutoriada y la del pago efectivo de la misma; sin embargo, los intereses que generaran las sumas antes referidas serán los corrientes para operaciones reajustables, que se devengarán desde que el deudor sea constituido en mora.

Por estas consideraciones y teniendo además presente lo dispuesto en los artículos 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se declara:

I.- Que se rechaza el recurso de casación en la forma.

II.- Se revoca la sentencia de cinco de agosto de dos mil veinticuatro, dictada por el Vigésimo Cuarto Juzgado Civil de Santiago, **sólo en cuanto** acogió parcialmente la excepción de reparación integral del daño, y en su lugar, se decide que ésta queda íntegramente rechazada.

III.- Se confirma, en lo demás apelado la referida sentencia, **con declaración**, que el monto de indemnización de perjuicios que el demandado deberá pagar a las actoras, son los siguientes:

1. Yanet Manzano Kasis, \$50.000.000 (cincuenta millones de pesos);
2. Paola Manzano Kasis, \$50.000.000 (cincuenta millones de pesos);
3. Sandra Manzano Kasis, 50.000.000 (cincuenta millones de pesos).

IV.- Las sumas antes indicadas serán reajustadas en la forma establecida en el fallo en alzada y devengarán intereses desde que el deudor sea constituido en mora.

Regístrese y devuélvase.

Redacción de la Ministra señora Sandra Araya Naranjo.

N° Civil- 14182-2024.-

Pronunciada por la **Octava Sala** de la Itma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Alejandro Rivera Muñoz e integrada, por la Ministra señora Sandra Araya Naranjo y la Abogada Integrante señora Magaly Correa Farías.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QXSTXVXSMT



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QXSTXVXSMT

Pronunciado por la Octava Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Alejandro Rivera M., Sandra Lorena Araya N. y Abogada Integrante Magaly Carolina Correa F. Santiago, tres de junio de dos mil veinticinco.

En Santiago, a tres de junio de dos mil veinticinco, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: QXSTXVXSMT